EL OBJETO DE LA CIENCIA DEL DERECHO

JORGE ADAME GODDARD

SUMARIO: I. *Introducción*. II. *Una primera aproximación al objeto del derecho*. III. *El objeto material del derecho*. IV. *El objeto formal del derecho*. V. *Conclusión*.

I. INTRODUCCIÓN

Desde hace algún tiempo me viene inquietando la cuestión acerca de lo que es el derecho, entendido como ciencia.¹ Concibo la ciencia en general como un saber ordenado y demostrativo (conocimiento por sus causas) y discible, esto es que puede ser enseñado y aprendido. Pero entiendo que el derecho es una ciencia práctica, en el sentido aristotélico de ciencia ordenada a la acción personal (a lo agible). En concreto, opino que el derecho es

¹ Expreso algunas de mis ideas sobre este punto en el artículo publicado en *Ars Iuris*, titulado “¿Sirve la discusión de casos en las aulas para la formación jurídica?”, cuyo primer epígrafe se ocupa de la ciencia jurídica. No considero el significado que tiene la palabra derecho en las expresiones “derecho subjetivo” o pretensión, ni “derecho objetivo” o norma.

la ciencia del juicio acerca de lo justo concreto, es decir del acto debido en una determinada relación.²

Desde ese punto de partida, pretendo ir reflexionando sobre qué tipo de ciencia es el derecho, cuáles son su objeto, métodos y fuentes. Por lo pronto, presento en esta comunicación una reflexión acerca de lo primero, de su objeto. Habiendo hecho esta precisión, se podrá posteriormente reflexionar sobre su método y fuentes.

II. UNA PRIMERA APROXIMACIÓN AL OBJETO DEL DERECHO

Con mucha frecuencia se dice que el objeto del derecho es el orden de la conducta humana en sociedad, o, en otras palabras, el orden social. El objeto del derecho se presenta entonces como el conocimiento de las normas, reglas, preceptos y principios del orden social. De acuerdo con este enfoque, como la mayor parte de las normas que integran el orden social son las leyes, el objeto del derecho es principalmente el conocimiento de las leyes.

Las leyes son ordenamientos generales, promulgados por la potestad política, que ordenan las conductas de los ciudadanos en relación con el bien común o bien público. Si el derecho es la ciencia que conoce las leyes, podría concluirse que el derecho es simplemente el saber sobre el contenido de las leyes y, en principio, de todas las leyes. Pero esto tiene dos grandes objeciones. Una es que el contenido de las leyes es de muy diversa naturaleza, y muchas veces de carácter técnico, como el de las leyes urbanísticas, de salud, económicas, médicas, organizativas, etcétera, por lo que parece absurdo que una sola ciencia se ocupe de contenidos tan diversos.

La otra objeción es que la ley es un acto de la potestad legislativa, siempre cambiante, por lo que el derecho no tendría un

² La idea la he tomado de Álvaro d'Ors, principalmente en *Nueva Introducción al estudio del derecho* (Madrid, 1999). Hice un comentario de este libro, publicado en *Ars Iuris* con el título "Introducción al derecho nuevo" donde manifestaba que en esa obra hay una nueva concepción del derecho.

contenido propio y sus conclusiones acerca del contenido de las leyes quedarían superadas por el acto imperativo del legislador que modificara o revocara una ley, y no es razonable que una ciencia dependa de la voluntad política o de las mayorías parlamentarias.

Podría también considerarse que el derecho fuera la ciencia que determinara cómo legislar, es decir, que definiera los requisitos formales de las leyes, así como los procedimientos para su elaboración, aprobación y eventual promulgación. Pero esto es objeto de la ciencia de la legislación, que es una parte de la política, entendida como la ciencia del gobierno, ya que legislar es la principal forma de gobernar.

Me parece que se eliminan esas dificultades cuando se advierte que el objeto del derecho no es el conocimiento del orden social, ni su establecimiento o reforma, sino el juicio acerca de la conducta personal de los ciudadanos en casos concretos, lo cual muchas veces requiere la consideración de lo que prescriben las leyes. El objeto del derecho no es la ley (o la “norma”), sino el juicio.³

El objeto del derecho es entonces el juicio sobre lo que es justo en casos concretos. La determinación o declaración de lo que es justo se hace mediante un juicio en el que, considerando una determinada relación entre dos o más personas, se concluye cuál es la conducta justa entre ellas, esto es qué actos puede exigir una de otra. Por eso se ha dicho que el derecho consiste en juicios,⁴ o que es propiamente la actividad de los jueces, es decir el juicio de aquellos encargados por la comunidad de declarar lo justo en relaciones concretas.

³ Álvaro d’Ors ha hecho una interesante y, una vez comprendida, divertida crítica de esta doble manera de ver el derecho, como orden normativo o como ciencia del juicio en “Ordenancistas y Judicialistas” (1960), reimpreso en *Estudios varios sobre el derecho en crisis* (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Roma, Madrid, 1973) 35 ss.

⁴ Ciceron, *pro Sest.* 42,92: *iudicia, quibus omne ius continetur* (los juicios, en los que se contiene todo el derecho); D 5,2,17,1: *ius fieri ex sententia iudicis* (el derecho se hace por la sentencia del juez).

Lo justo es siempre un acto debido por una persona a otra. Lo justo no es algo abstracto, ni un “ideal, sino simplemente, el acto debido, como pagar el precio, restituir lo prestado, cumplir la ley, sufrir una pena, etcétera. Lo justo es siempre un acto, y no una cosa; en ocasiones el acto puede estar referido a una cosa, como entregar ciertas mercancías, pero lo que propiamente se califica como justo es el acto de entregarlas y no las mercancías mismas; como puede ser que las mercancías, o cualquier otra cosa a la que se refiera algún acto debido, tengan que cumplir ciertas requisitos, se suele decir, impropia o análogamente, que las mercancías son “justas” si cumplen los requisitos establecidos; pero en el fondo, lo justo es el acto de entregarlas.

La definición de lo justo es resultado de un juicio, es decir de una operación intelectual por la que se afirma o niega que un determinado acto es justo. Esto presupone la convicción de que se puede discernir, conforme a una medida objetiva, cuál es el acto justo en las relaciones concretas. Si no existiera una medida objetiva de lo justo, no habría juicio, y lo justo lo determinaría el predominio de la voluntad más fuerte.

Para ir precisando en lo sucesivo cuál es el objeto del derecho, haré uso de la distinción entre objeto material de una ciencia, el sector de la realidad que estudia, y objeto formal, el punto de vista o enfoque desde el cual contempla ese sector de la realidad.

III. EL OBJETO MATERIAL DEL DERECHO

En un primer acercamiento, cabe decir que el objeto material del derecho son los actos libres practicados por una persona en referencia a otra.

Son actos libres aquellos que proceden de la libre voluntad personal, esto es que han sido deliberados, decididos y practicados sin coacción externa ni interna. Los que no reúnen estas características, como los actos de un enfermo mental, no son propiamente objeto del derecho, pero pueden ser considerados como una circunstancia de hecho que merece ser tomada en cuenta al formular un juicio. Así, los actos del enfermo mental que pro-

dujeron daños en los bienes de alguien deben ser considerados como una circunstancia de hecho al momento de juzgar acerca de la responsabilidad de la persona encargada de cuidarlo.

No todas las acciones libres son objeto del derecho, sino sólo las practicadas en relación con otra persona. A esas acciones se les puede denominar “servicios”. Los actos que hace una persona para su propio bien como comer, descansar o jugar no son objeto del derecho.

Los actos de los que se ocupa el derecho son actos personales, es decir atribuibles a personas determinadas. No son objeto del derecho los comportamientos colectivos, que podrían denominarse relaciones sociales en sentido colectivo, como las de antagonismo entre ciertos grupos, o las relaciones económicas entre productores y consumidores, o entre patrones y trabajadores, colectivamente consideradas.⁵

Los actos a favor de otra persona o “servicios” son consecuencia de las relaciones que hay entre las personas. De éstas, pueden distinguirse, en primer lugar, las relaciones que se establecen entre personas particulares y las que se establecen entre las personas y la comunidad.

Las relaciones entre personas particulares son de diversa naturaleza según cuál sea el fundamento o causa de la relación. Hay: i) las relaciones patrimoniales, en que las personas interactúan por razón del aprovechamiento de las cosas; ii) las relaciones interpersonales, que son aquellas que unen a las personas por razón de ellas mismas, como la amistad o las relaciones familiares.

De estas relaciones interesan al derecho sólo las relaciones patrimoniales, en las que las personas están claramente diferen-

⁵ Es claro que la relación personal entre este productor y este otro consumidor, que constituye un contrato de compraventa o de prestación de servicios, sí es una relación jurídica, pero no lo es la relación del comportamiento colectivo de los consumidores respecto de los productores. Lo mismo cabe decir de la relación entre un trabajador y el empleador que, cuando es personal, constituye un contrato laboral, pero es algo distinto de la relación colectiva de antagonismo, colaboración o indiferencia que puede haber entre empleadores y trabajadores.

ciadas y hay una cosa (un bien o una obra) que es la causa de la relación y lo que permite discernir objetivamente, mediante un juicio, las conductas o servicios que corresponden a cada uno. Las relaciones interpersonales, en cuanto tales, no son objeto del derecho, porque en ellas se produce una unión entre las personas, de la que resulta que el bien de una es el bien de la otra, y así lo suyo es también lo mío. Hay sin embargo en estas relaciones interpersonales algunos aspectos que sí interesan al derecho, como son los de carácter patrimonial, por ejemplo el pago de alimentos por los padres a favor de los hijos.

Las relaciones entre las personas y la comunidad son relaciones desiguales, ya que las personas se relacionan con la comunidad como las partes al todo, a diferencia de las relaciones establecidas entre las personas que son relaciones entre iguales. Las personas se relacionan con la comunidad aportando a ella lo que le es necesario para su subsistencia y buen funcionamiento. La comunidad se relaciona con las personas distribuyendo entre ellas las cargas y los beneficios de la gestión común.

La conducta que las personas practican en relación con la comunidad está determinada por los mandatos imperativos (del tipo que sean, leyes, órdenes, costumbre) que rigen la vida de la comunidad, por lo que cabe decir que el contenido de la relación de las personas con la comunidad es, en términos generales, la obediencia de las personas a las leyes (incluido en esta palabra todo tipo de mandato imperativo).

Las relaciones de las personas con la comunidad interesan al derecho en cuanto la obediencia de las personas a la ley puede ser materia de un juicio objetivo. Cuando el juicio lo hacen los propios gobernantes, o entidades administrativas que emitieron el mandato, no tiene, en principio, las condiciones de un juicio objetivo, ya que quien impera es el mismo que juzga. Eso es lo que ocurre en los llamados recursos de revisión ante las autoridades administrativas, y por consiguiente no puede decirse que esas relaciones sean materia propiamente jurídica, sino tan sólo cuasi-jurídica. Pero si el juicio se remite a un juez independiente, no subordinado, entonces puede hablarse de un jui-

cio objetivo y de que la conducta imperada por la comunidad a las personas es materia propiamente jurídica.

En este ámbito de las relaciones entre las personas particulares y la comunidad se dan también relaciones contraídas voluntariamente entre los particulares y la administración pública o gobierno, con motivo del aprovechamiento de los bienes públicos por los particulares, o con motivo de la adquisición de bienes u obras por parte del gobierno. Son estas relaciones semejantes a las de contenido patrimonial que contraen los particulares entre sí, pues ambas se contraen voluntariamente y tienen contenido patrimonial; pero se distinguen, porque la administración pública contrae las relaciones sujeta a los ordenamientos administrativos, a veces muy minuciosos, y no con la flexibilidad que pueden tener los particulares. Cuando el juicio sobre lo justo en estas relaciones se deja a tribunales administrativos, no hay juicio propiamente jurídico, pero si se da la intervención de un juez independiente, entonces hay juicio jurídico.

Lo que la comunidad, por medio de sus representantes, actúa en relación con las partes es principalmente el gobierno, que comprende la conservación y defensa de la comunidad, su buen funcionamiento y la adecuada distribución de las cargas y beneficios de la gestión común entre todas las partes. Actualmente muchas de las decisiones de gobierno tienen que tomarse siguiendo los cauces y respetando las formas establecidas por las leyes, pero siguen quedando muchas decisiones al libre arbitrio de los gobernantes, que son la materia de las llamadas “facultades discrecionales”.

Las relaciones de la comunidad con las personas, que consisten principalmente en los distintos actos de gobierno (incluido el acto de legislar, que es quizá el acto de gobierno de mayor trascendencia), es materia en parte jurídica, cuando los actos de gobierno pueden ser sometidos a juicio ante un juez independiente, quien juzgará si los gobernantes han obedecido las leyes aplicables. Este juicio es semejante al de la obediencia de los ciudadanos a las leyes.

Las decisiones de los gobernantes que no están sujetas a juicio ante un juez independiente, a un juicio propiamente jurí-

dico, sino sólo al juicio ante un órgano político o al juicio de la opinión pública, como la de legislar o no legislar con determinado contenido, declarar la guerra o intervenir en ella, aliarse comercialmente con un país, aprobar un presupuesto o ejercerlo de un modo u otro dentro de los límites prescritos, definir una política económica, o una política social o una educativa, y muchas otras más. Todas estas conductas, en tanto no son imperadas por las leyes, ni sujetas a juicio de legalidad, no son materia jurídica.

Los actos de gobierno son principalmente materia de juicio político, es decir de un juicio en el que se juzga, no de la obediencia a las leyes, sino de la conveniencia del acto en relación al bien de la comunidad. Y esto es materia de otra ciencia, de la política.

Considerando todo lo anterior puede concluirse que el objeto material del derecho lo constituyen: i) los actos o “servicios” que las personas deben prestarse en las relaciones patrimoniales; ii) los actos o “servicios” que deben prestarse los particulares y la administración pública en sus relaciones de carácter patrimonial; iii) los actos imperados por las leyes que deben practicar los particulares o los gobernantes. En todos estos casos, esos actos son materia jurídica siempre que la definición de si son o no debidos se remita al juicio de un juez independiente.

Considerando el objeto material del derecho arriba definido, se advierte que los actos que son materia del derecho son debidos o por causa de relaciones patrimoniales libremente contraídas, o por el mandato imperativo de la ley que establece ciertos actos como debidos. Tomando en cuenta esta diferencia, Álvaro d’Ors⁶ da un nombre diferente para cada una de esas relaciones. Reserva el nombre de “relaciones” a las contraídas voluntariamente, y llama “situaciones” a las imperadas por la ley.

La distinción entre relaciones y situaciones es la base de la distinción de dos partes del derecho. El derecho privado, que se ocupa de las relaciones,⁷ y el derecho público, de las situaciones.

⁶ *Nueva Introducción al estudio del derecho* (Madrid, 1999), § 28.

⁷ Entre las “relaciones” caben las contraídas voluntariamente entre los particulares y la administración pública, que hoy suelen llamarse “contratos administrati-

Como la materia de una y otra parte es diferente, también son diferentes sus criterios, reglas de juicio y soluciones.

Considerando esa distinción, cabe afirmar que el objeto material del derecho son los actos judicialmente exigibles en las relaciones patrimoniales libremente contraídas y en las situaciones determinadas por el ordenamiento jurídico.

Lo judicialmente exigible es algo que se va determinando históricamente, en cada pueblo y en cada tiempo. Hoy son judicialmente exigibles conductas, por ejemplo las prescritas por las leyes protectoras del medio ambiente, que hace cincuenta años no lo eran; hoy se tipifican como delitos conductas que antes no lo eran y dejan de tipificarse como tales conductas que antes eran penadas.

El objeto material del derecho es por consiguiente algo variable, históricamente determinado, aunque de hecho contiene ciertas relaciones (como las relativas al derecho de propiedad o a los contratos) o situaciones (como el pago de impuestos o la tipificación del robo, el homicidio o el fraude) que constituyen un estrato permanente.

IV. EL OBJETO FORMAL DEL DERECHO

Es la determinación del acto o servicio debido en las relaciones y situaciones. Es, dicho en otras palabras, la determinación o declaración de lo justo. Esto es propiamente el significado originario de la palabra jurisdicción, *iuris dictio* o declaración de lo justo.

En términos generales, se considera que un acto es debido, primero, en el sentido de que no es necesario, que puede ser practicado o no practicado; desde este punto de vista se dice que la libertad o autodeterminación de la persona es el fundamento subjetivo del deber, ya que la conducta predeterminada por causas distintas de la voluntad no puede ser debida, es simplemente

vos”, pero que, por su contenido y voluntariedad, no son diferentes de las relaciones patrimoniales entre particulares.

necesaria. Es debido, además y principalmente, en el sentido de que su práctica contribuye al perfeccionamiento o bien de la persona misma y de la comunidad; por eso, el fundamento objetivo del deber es el bien o perfección de la persona y la comunidad.

El derecho se interesa por lo debido, pero no por todo lo debido, sino sólo por aquello que es judicialmente exigible.

Lo debido por justicia o lo justo es un acto de una persona que resulta ajustado a otra, según cierta razón de igualdad.⁸ Las causas que determinan cuál es la conducta justa son estas tres: i) la naturaleza; ii) el convenio privado y iii) el convenio público o ley.⁹

La naturaleza racional de las personas hace debidas ciertas conductas en todas sus relaciones, por ejemplo la veracidad en sus declaraciones, el respeto de sus personas y bienes o la ayuda mutua; todas éstas son acciones que perfeccionan a la persona que las practica y a la misma relación, contribuyendo así al bien de la persona respecto de quien se practican y al de la comunidad en su conjunto. Lo justo por naturaleza también se refiere a lo exigido por la misma naturaleza de la relación, por ejemplo es naturalmente debido el equilibrio o equidad en las relaciones de intercambios de bienes, o la ausencia de dolo en los contratos, o la pena por los delitos. Finalmente, lo justo por naturaleza tiene que ver con la naturaleza de las cosas que intervienen en una relación, por ejemplo la obligación de entregar una cosa se extingue si es una cosa específica y perece por caso fortuito, pero no si es una cosa genérica.

El convenio privado hace debidas las conductas que las partes acordaron. Hay distintos convenios que producen distintos tipos de deberes. Los principales convenios son los pactos, los préstamos, las promesas y los contratos. En todos estos casos (de relaciones), lo justo es lo válidamente convenido.

⁸ Santo Tomás de Aquino, *Summa Theologiae* II,2 q. 57 a. 1.

⁹ Esta lista de causas de lo debido en justicia, la da Santo Tomás de Aquino en *Summa Theologiae* II,2 q. 57 a. 2. Me parece una lista exhaustiva.

El convenio público es aquel aceptado por la comunidad, cuya expresión más importante es la ley y los actos imperativos de la potestad constituida, pero comprende también la costumbre reconocida. Para simplificar hablaré sólo de la ley, aunque lo dicho pueda extenderse a otras decisiones potestativas, a las sentencias judiciales que establecen jurisprudencia obligatoria y a la costumbre. En estos casos (de situaciones), lo justo es lo imperado por la ley legítimamente emitida.¹⁰

Se observa que ni el convenio ni la ley potestativa son el criterio último de juicio, porque se habla del convenio válido y de la ley legítima. Esto implica que hay criterios para juzgar de la validez de los convenios y la legitimidad de la ley. Estos son criterios que derivan de la naturaleza y que pueden estar o no reconocidos por un ordenamiento positivo.

En el caso de los convenios, parece claro, por ejemplo, que aquél en el que intervino error grave de una de las partes no es válido, por el simple hecho de que el error impide la voluntad real de convenir; o que el contrato de intercambio de bienes excesivamente desequilibrado a favor de una parte, sin que haya intención de donar de la otra, no es válido; o que el pacto de no responder por el incumplimiento de una obligación tampoco es válido. Todos estos casos son convenios en los que se conviene algo contrario a la naturaleza racional (por ejemplo, a la voluntad libre) o a la naturaleza de la relación (al equilibrio o equidad en las prestaciones, o a la ausencia de dolo). Si el ordenamiento positivo reconoce esas causas de invalidez del contrato, tanto mejor; si no los reconoce, se puede de todos modos discutir su validez con base en la propia racionalidad de la persona y de la relación.

¹⁰ Los tratados o convenciones entre comunidades nacionales son semejantes a los convenios entre personas particulares en tanto que son convenios que obligan a quienes los hacen, pero se distinguen de los convenios privados por la naturaleza pública de las partes. Los tratados bilaterales son como los convenios privados que establecen “relaciones” de igualdad; en cambio, los multilaterales integran a una nación como parte de un todo, por lo que los conflictos que puede suscitar su aplicación son más semejantes a las “situaciones” entre los individuos y la comunidad.

En el caso de la ley, sucede algo semejante. Es evidente, por ejemplo, que la ley impera sólo si cumple ciertos requisitos formales de aprobación, promulgación y publicación, de modo que se puede discutir su validez haciendo referencia a esos criterios, que puedan estar reconocidos por el ordenamiento político (que es lo normal) o no, y en el caso de que no lo estuvieran, podría, por ejemplo, objetarse la validez de una ley que no ha sido efectivamente publicada, porque esto es algo exigido por la naturaleza de la convivencia social entre personas. También puede objetarse la validez de la ley, por razón de su contenido, cuando contradice lo dispuesto por alguna ley de mayor jerarquía, o bien cuando contradice preceptos de orden natural, como el de la distribución proporcional (justa) de las cargas y beneficios, o el de respeto de la propiedad o el de respeto a la vida e integridad personal.

Hay una diferencia importante entre el juicio sobre la validez de un contrato y el juicio sobre la validez de una ley, por razón de los efectos que tiene. Cuando se declara un convenio inválido se afecta exclusivamente a las partes, de modo que el juicio no pasa de ser una declaratoria acerca de lo justo en esa relación. Pero cuando se declara inválida una ley, se afecta a todos los ciudadanos que estarían sometidos a esa ley, a la comunidad en su conjunto y a la misma potestad política; es un juicio que afecta el orden establecido, por lo que rebasa el ámbito de lo propiamente jurídico y constituye más bien un juicio político o constitucional.

El punto de vista propio del derecho es el juicio acerca del acto debido o justo por razón de la naturaleza, de un convenio privado o de un convenio público. Incluye el juicio acerca de la validez de un convenio, pero no el de la validez de una ley, que es un juicio político.

Para hacer el juicio jurídico se considera primero el tipo de relación o situación en la que se pretende definir qué es lo debido o lo justo. En las relaciones de intercambio de bienes (relaciones patrimoniales) lo justo se define considerando primordialmente el criterio de equidad o igualdad aritmética. En las relaciones de distribución de bienes, lo justo se determina prin-

principalmente por el criterio de proporción o igualdad proporcional; esto vale para las relaciones patrimoniales que implican distribución de bienes, como la distribución de utilidades entre los socios, y también para la distribución de las cargas y beneficios del bien común entre los ciudadanos que se hace por las leyes y las políticas fiscales, presupuestarias y sociales. En las situaciones imperadas a los ciudadanos por el ordenamiento jurídico, lo justo se precisa primordialmente con el criterio de la obediencia a lo prescrito en las leyes. Estos tres criterios para determinar lo justo: lo equitativo, lo proporcional, lo prescrito por la ley, corresponden a las tres clases de justicia que tradicionalmente se consideran: la justicia conmutativa, la distributiva y la legal.¹¹

Lo justo equivale al acto o servicio debido por una persona a otra. Lo que para la primera es un acto debido a otra, para ésta es lo “suyo”, esto es, lo que puede exigir de la otra. Por eso lo justo puede contemplarse desde los dos puntos de vista, y así decirse que lo justo es lo debido o la deuda o que lo justo es lo exigible o derecho.

El objeto formal del derecho no es la justicia, sino lo justo. La justicia es una perfección o virtud de la voluntad, por la que ésta está fuertemente inclinada a dar a cada quien lo suyo, es decir a practicar lo justo. Nótese que se trata de practicar lo justo, y no sólo de reclamarlo. El objeto del derecho es, en cambio, el juicio por el que se define o declara aquello que es justo. Por eso, el derecho, al definir lo justo, precisa cuál es la conducta que debe practicar la voluntad justa.

Hay ciertamente una interrelación entre el juicio sobre lo justo y la voluntad justa, pues si bien no puede haber voluntad justa sin el juicio correspondiente, tampoco puede juzgar certeramente sobre lo justo quien carece de una voluntad justa,

¹¹ La distinción entre una justicia legal o general, que ordena a la persona hacia el bien común, como la parte al todo, y otra justicia particular que comprende la distribución de bienes entre varios (justicia distributiva) y las conmutaciones o intercambios de bienes (justicia conmutativa), proviene de Aristóteles, *Ética a Nicómaco* V,2.

es decir quien no practica habitualmente lo justo.¹² Por eso se dice que quien juzga sobre lo justo y tiene una voluntad justa juzga con facilidad, como con cierta connaturalidad, porque juzga sobre lo que tiene experiencia.

El objeto formal del derecho es el juicio acerca del acto o “servicio” justo en las relaciones y situaciones, pero cabe una precisión más. Se refiere a lo justo que puede ser determinado mediante el juicio de un juez independiente, encargado por la comunidad de juzgar y, eventualmente, de ordenar potestativamente o imperar la práctica de la conducta justa. El objeto formal del derecho es entonces lo justo judicialmente exigible.

La referencia al juez independiente es necesaria para que se pueda hablar de un juicio objetivo, y por consiguiente de una ciencia acerca de ese juicio. Si el juicio lo hace una parte interesada, como sucede en los procesos administrativos que es la misma entidad pública encargada de aplicar una ley la que juzga acerca de la obediencia a la ley, se puede afirmar que es un juicio cuasi-jurídico, porque si bien tiene que hacerse conforme a ciertas reglas y criterios, falta la independencia necesaria para asegurar la objetividad. Si el caso se remite a un tribunal independiente, como sería en nuestro medio el amparo indirecto, se produce un juicio plenamente jurídico.

Todos los juicios objeto del derecho son resultado de un proceso dialéctico en el que se confrontan opiniones e intereses, pero considerando sus variantes pueden distinguirse tres tipos: i) los juicios entre personas privadas en los que se confrontan intereses patrimoniales, que son los juicios que pueden llamarse civiles en sentido amplio; ii) los juicios donde se confrontan los intereses de personas privadas y la administración pública, o juicios contencioso-administrativos, en los que esta última tiene cierta preponderancia, y iii) los juicios de represión de los delitos o juicios penales, en los que interviene como parte un defensor oficial del interés público (entre nosotros el agente del

¹² Por eso dice Santo Tomás, *Summa Theologiae* II 2, q. 60 a. 1, que el juicio es “un acto de justicia”.

ministerio público). Los juicios laborales, cuando se trata de conflictos individuales entre un trabajador y su patrono, son juicios civiles; si se trata de conflictos colectivos, cabrían más bien entre los juicios administrativos, por la intervención decisiva que tienen las instancias administrativas laborales.

A estos tres distintos tipos de juicios corresponden diversos criterios que los jueces tienen en cuenta para juzgar, y que conforman distintos sectores del derecho: el civil, el administrativo y el penal. Los juicios civiles, que se ocupan de relaciones, son objeto del derecho privado y los administrativos y penales, que juzgan acerca de situaciones, del derecho público.¹³

Los conflictos que se presentan entre los poderes políticos, sean entre los poderes federales, o entre los poderes locales, o entre los poderes federales y los locales, que son materia de un juicio constitucional, no son juicios jurídicos, ni por su materia (no son conflicto de intereses en el que intervenga al menos una persona particular), ni por su objeto formal, pues no procuran declarar lo que es justo sino principalmente mantener el orden social y la capacidad de gobernar.

V. CONCLUSIÓN

De conformidad con lo que se ha expuesto, el objeto del derecho se puede enunciar así: es la determinación del acto o servicio justo, judicialmente exigible, en las relaciones patrimoniales entre personas particulares o entre personas particulares y la comunidad, y en las situaciones reguladas por el ordenamiento jurídico entre las personas y la comunidad o viceversa.

¹³ Álvaro d'Ors, *Nueva Introducción al estudio del derecho* (Madrid, 1999), § 27.